



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General
de Servicios Sociales e Integración
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

**MEMORIA EXTENDIDA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL
PROYECTO DE DECRETO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, SOBRE LA
ZONIFICACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID Y LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE SERVICIOS
SOCIALES.**

FICHA DE RESUMEN EJECUTIVO

Consejería / Órgano proponente	Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Dirección General de Servicios Sociales e Integración.	Fecha	Septiembre de 2024
Título de la norma	Proyecto de decreto, del Consejo de Gobierno, sobre la zonificación del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la elaboración del Mapa de Servicios Sociales.		
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> Ejecutiva <input checked="" type="checkbox"/> Extendida		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	El proyecto de decreto establece las normas para el diseño de la configuración territorial del Sistema Público de Servicios Sociales y la elaboración del Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.		
Objetivos que se persiguen	La norma tiene como objetivo regular el procedimiento de organización territorial del Sistema Público de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y su actualización, así como definir los criterios para la elaboración del Mapa de Servicios Sociales, con el fin de mejorar la ordenación de la prestación de servicios sociales, y la calidad y eficacia de dicho sistema público.		
Principales alternativas consideradas	<p>La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, prevé de manera expresa, en su artículo 21, este desarrollo reglamentario.</p> <p>Esta iniciativa se halla incluida en el Plan Normativo de la XIII Legislatura, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2023. Teniendo en cuenta estas circunstancias, no se han considerado otras alternativas.</p>		

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Decreto.
Estructura de la norma	El proyecto de decreto consta de una parte expositiva, otra dispositiva integrada por dieciséis artículos, distribuidos tres capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Informes a los que se somete el proyecto	<p><u>Solicitud de forma simultánea:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de coordinación y calidad normativa. - Informe sobre el impacto en la infancia y la adolescencia y en la familia. - Informe de impacto por razón de género. - Informe de impacto en la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. - Informe del Consejo Regional del Mayor y del Consejo Asesor de personas con Discapacidad. - Informe de la Dirección General de Presupuestos, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. - Informe de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia. - Informe de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. - Informe de la Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. - Informes de las secretarías generales técnicas de las consejerías. <p><u>Solicitud de forma sucesiva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. - Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. - Informe de la Comisión Jurídica Asesora.

<p>Trámites de participación: consulta pública / audiencia e información pública</p>	<p>La elaboración del proyecto de decreto se ha sometido a trámite de consulta pública, de conformidad con los artículos 4.2.a) y 5 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y el artículo 60.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, mediante su publicación en el Portal de Transparencia, en el periodo comprendido entre los días 17 de mayo y 6 de junio de 2024.</p> <p>Se someterá a los trámites de audiencia e información pública mediante su publicación en el Portal de Transparencia. conforme establecen el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en la Comunidad de Madrid, y el artículo 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril. Teniendo en cuenta las competencias de las entidades locales en materia de atención social primaria, se dará audiencia a la Administración local a través de la Federación de Municipios de Madrid, así como al Ayuntamiento de Madrid, por su especial relevancia y singularidad.</p>
<p>ANÁLISIS DE IMPACTOS</p>	
<p>Adecuación al orden de competencias</p>	<p>El Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, señala en su artículo 1.1 que el titular de esta consejería ejercerá las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones en vigor, correspondiéndole, como órgano superior de la Administración de la Comunidad de Madrid, el desarrollo general, la coordinación, la dirección, ejecución y control de las políticas públicas del Gobierno en los ámbitos de la atención social y en particular en los servicios sociales.</p> <p>El artículo 5 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, atribuye a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración, como órgano adscrito a la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la ordenación y planificación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid, en colaboración con otros entes públicos o privados.</p> <p>La disposición final primera de la Ley 12/2022, de 21 de</p>

	<p>diciembre, autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la misma.</p> <p>La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, conforme establece su artículo 21.g), otorga al Consejo de Gobierno la facultad de aprobar el presente proyecto de decreto a propuesta de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, previa deliberación, y oída o de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.</p>	
<p>Impacto económico y presupuestario</p>	<p>Efectos sobre la economía en general.</p>	<p>La norma no tiene efectos directos sobre la economía en general.</p>
	<p>En relación con la competencia.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> la norma no tiene efectos significativos sobre la competencia</p> <p><input type="checkbox"/> la norma tiene efectos positivos sobre la competencia</p> <p><input type="checkbox"/> la norma tiene efectos negativos sobre la competencia</p>
	<p>Desde el punto de vista de las cargas administrativas</p>	<p><input type="checkbox"/> supone una reducción de cargas administrativas Cualificación estimada:</p> <p><input type="checkbox"/> incorpora nuevas cargas administrativas Cualificación estimada:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No afecta a cargas administrativas</p>



	<p>Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma:</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Comunidad de Madrid</p> <p><input type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de otras Administraciones territoriales.</p>	<p><input type="checkbox"/> Implica un gasto</p> <p><input type="checkbox"/> Implica un ingreso</p> <p>El proyecto de decreto carece de impacto presupuestario.</p>
Impacto por razón de género	<p>Negativo <input type="checkbox"/></p> <p>Positivo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nulo <input type="checkbox"/></p>	
Impacto en la, infancia, en la adolescencia y en la familia.	<p>Negativo <input type="checkbox"/></p> <p>Positivo <input type="checkbox"/></p> <p>Nulo <input checked="" type="checkbox"/></p>	
Otros impactos o consideraciones: En materia de accesibilidad.	<p>Negativo <input type="checkbox"/></p> <p>Positivo <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nulo <input type="checkbox"/></p>	

INTRODUCCIÓN

La presente memoria extendida se elabora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con el citado artículo: «cuando se trate de anteproyectos de ley, de proyectos de decreto legislativo y de reglamentos ejecutivos con un impacto relevante de carácter económico, presupuestario, social, sobre cargas administrativas o cualquier otro, se elaborará una memoria extendida que se referirá a la justificación de su acierto y oportunidad, el análisis de los impactos y la descripción de su tramitación y consultas (...)».

La Dirección General de Servicios Sociales e Integración, proponente de la iniciativa, estimó en un primer momento que la propuesta normativa podría conllevar, de manera indirecta, un impacto presupuestario, caso de que se elevara la prima de financiación de la prestación de servicios sociales por mancomunidades prevista en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre. Aunque dicha posibilidad no derivaba *per se* de la aprobación de la norma, se optó por contemplar esa eventualidad como incentivo para la prestación mancomunada de servicios sociales, dado que la situación actual, en la que algunos pequeños municipios lo hacen de manera aislada, no se considera la más idónea desde el punto de la calidad y la homogeneidad del sistema. Por otra parte, la prestación mancomunada resulta eficiente, frente a alternativas como la prestación directa por la Comunidad de Madrid en municipios pequeños. Por este motivo, se realizó una memoria extendida

A continuación, se detalla el alcance de la propuesta normativa que se plantea como proyecto de decreto, del Consejo de Gobierno, sobre la Zonificación del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y para la elaboración del Mapa de Servicios Sociales.

I. FINES, OBJETIVOS, OPORTUNIDAD Y LEGALIDAD DE LA NORMA

1. Oportunidad de la norma.

La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, dedica el capítulo IV de su título I a la organización territorial del Sistema Público de Servicios Sociales y sitúa la responsabilidad para determinar el modo de organización territorial en el Consejo de Gobierno. Su artículo 21 prevé este desarrollo normativo, por lo que su fórmula debe ser la de un decreto, de acuerdo con el artículo 21. g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

El proyecto de decreto figura como compromiso en el Plan Normativo de la XIII Legislatura, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2023.

Este proyecto de decreto representa un avance en el procedimiento de organización territorial del Sistema Público de Servicios Sociales respecto del vigente hasta 2023, para cuya elaboración incorpora a los distintos integrantes de dicho sistema público. Asimismo, plantea un modelo más sencillo, flexible y vinculado a la Historia Social Única (en adelante, HSU).

Transcurridos veinticinco años desde la aprobación del –ahora derogado- Decreto 109/1998, de 18 de junio, por el que se actualizaba la Zonificación de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, se hace necesario contar con una nueva norma que refleje el proceso de evolución de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, representado por la Ley 12/2022, de 21 de diciembre.

Por otro lado, el artículo 50.5 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, confiere a la consejería competente en materia de servicios sociales la responsabilidad en la elaboración del Mapa de Servicios Sociales.

La norma es oportuna y necesaria para avanzar en la ordenación de los servicios sociales y mejorar la información a ciudadanos y profesionales sobre el acceso a prestaciones y recursos, y mejorar la eficiencia del sistema mediante nuevos instrumentos de relación y coordinación.

Para apreciar en detalle la oportunidad de la propuesta, se analizan a continuación los aspectos de su motivación y objetivos, así como la necesidad de la regulación.

2. Motivación

El proyecto de decreto da respuesta a la previsión de desarrollo normativo en materia de organización territorial, contemplada en el artículo 21 de la referida Ley 12/2022, de 21 de diciembre, como elemento necesario para el desarrollo del nuevo modelo de Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, su artículo 50 considera el Mapa de Servicios Sociales como un instrumento de planificación fundamental para la nueva organización del referido sistema, en sus vertientes territorial y funcional, mediante la configuración de la red de centros y servicios recogidos en el Catálogo de Prestaciones y la Cartera de Servicios.

El Mapa está vinculado a la Cartera de Servicios Sociales, puesto que en él se reflejan las prestaciones recogidas en la cartera, con sus características y ubicación geográfica. Ambos instrumentos se insertan en el sistema HSU como elementos indispensables para el diseño de los planes individualizados de intervención. Estas herramientas configuran un modelo de gestión del Sistema Público de Servicios Sociales orientado a la calidad y proximidad a los ciudadanos.

La entrada en vigor de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, hace imprescindible regular las normas de zonificación u organización territorial del Sistema, así como de elaboración del Mapa de Servicios Sociales. La ley atribuye competencia a la consejería competente en materia de servicios sociales para su elaboración en coordinación con las entidades locales, así como la facultad de asegurar la coherencia entre el Mapa, el Catálogo de Prestaciones y la

Cartera de Servicios, y el resto de elementos organizativos que estructuran dicho Sistema.

No se han considerado otras alternativas ya que el desarrollo se halla previsto en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre. Su no aprobación dejaría sin la necesaria cobertura normativa el desarrollo y actualización de la organización territorial del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y limitaría la eficacia de la HSU.

3. Objetivos.

El proyecto de decreto atiende a los objetivos y principios rectores establecidos en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, orientados a potenciar la calidad y la eficiencia del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. La organización territorial de los servicios sociales debe facilitar una prestación eficaz de los servicios, que representa la garantía del derecho de los ciudadanos a la atención social. Esta organización ha de atender principalmente a criterios demográficos, de accesibilidad, proximidad, socioeconómicos, urbanísticos, organizativos, así como a principios de eficiencia y equidad territorial.

La norma prevista introduce un procedimiento para la elaboración y aprobación de dicha organización territorial, así como del Mapa de Servicios Sociales como instrumento de planificación e información.

La propuesta establece que la definición del modelo organizativo, así como su actualización o modificación, se realizará con la participación de las entidades locales, en su calidad de integrantes del Sistema Público de Servicios Sociales y responsables de la prestación de servicios de atención social primaria.

El proyecto de decreto se orienta al logro de los siguientes objetivos:

- ✓ Establecer las bases de un sistema de organización territorial acorde con el modelo de Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que introduce la Ley 12/2022, de 21 de diciembre.
- ✓ Habilitar la creación de un sistema de zonificación flexible y adecuado a las exigencias de un contexto social en cambio permanente.
- ✓ Disponer de un instrumento de planificación útil y sencillo en su concepción y diseño.
- ✓ Habilitar un dispositivo de información digital accesible para usuarios y profesionales.

4. Legalidad de la norma.

La Ley 12/2022, de 21 de diciembre, prevé en sus artículos 21 y 50 su desarrollo reglamentario para establecer un sistema de organización territorial del Sistema Público de Servicios Sociales y la elaboración de mapas que faciliten información a los ciudadanos, a los profesionales para el desempeño eficaz de su función, así como para permitir una planificación fundamentada en datos.

Como se ha señalado, el proyecto de decreto figura en el Plan Normativo de la XIII Legislatura (2023-2027) de la Comunidad de Madrid aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2023.

II. PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN.

En la elaboración del proyecto de decreto se han seguido los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

La norma se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, puesto que constituye una herramienta básica para la ordenación y planificación del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, mediante un adecuado equilibrio entre la evaluación de las necesidades sociales, los recursos disponibles y la prestación de servicios sociales. De esta manera, el proyecto de decreto atiende una necesidad de interés general y lo hace mediante los cauces normativo y de elaboración apropiados.

La adecuación al principio de proporcionalidad queda asegurada ya que contiene la regulación imprescindible para atender a su finalidad, sin que suponga restricción de derechos a sus destinatarios.

El principio de seguridad jurídica lo garantiza la coherencia de la propuesta con el ordenamiento jurídico general y la normativa sectorial.

Se cumple con el principio de transparencia, habiéndose realizado los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, y 4.2.a) y d), 5 y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y, una vez aprobada la norma, se publica en el Portal de Transparencia.

En aplicación del principio de eficiencia, el decreto no conlleva cargas administrativas innecesarias o accesorias, al tiempo que, en su aplicación, se racionaliza la gestión de los recursos públicos, al completar la organización territorial del Sistema Público de Servicios Sociales y promover la coordinación entre los diferentes sistemas de protección social y proporcionar instrumentos para una planificación ordenada.

Por último, se ha valorado el ajuste al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta el esquema competencial definido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, y la necesidad de lograr una prestación de servicios sociales de calidad y homologable a la del resto de la red de Atención Social Primaria en todos los municipios de población inferior a 20.000 habitantes.

III. TÍTULO COMPETENCIAL

El artículo 148.1. 20ª de la Constitución Española, establece la capacidad de las comunidades autónomas para asumir competencias en materia de asistencia social.

El artículo 26.1. del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, confiere a esta, competencias exclusivas en dicha materia.

Asimismo, el artículo 27 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad de Madrid, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución, entre otras, de las materias de régimen local y régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración pública de la Comunidad de Madrid.

Las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de servicios sociales vienen precisadas en el artículo 10 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 21.g), de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, posee la facultad de aprobar mediante decreto los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes emanadas de la Asamblea.

En este mismo sentido, la disposición final primera de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de la que emana el presente desarrollo normativo, autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su ejecución y desarrollo.

El artículo 31.b). de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, atribuye a los consejeros la proposición y presentación de proyectos de decreto en materias propias de su competencia.

El artículo 21 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, atribuye al Consejo de Gobierno, la facultad de establecer, mediante reglamento, la división territorial que mejor se adecue a las circunstancias poblacionales y permita prestar los servicios sociales con arreglo a los principios enunciados en la ley. Por su parte, el artículo 50.5 de la misma ley, confiere a la consejería competente en materia de servicios sociales la responsabilidad en la elaboración del Mapa de Servicios Sociales.

El Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, atribuye a los directores generales, en el ámbito de sus respectivos sectores de atención, entre otras funciones, el impulso y elaboración de los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales relativos a materias propias de la dirección general, así como la realización de aquellos trámites que le corresponden por su condición de centro promotor, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica.

El artículo 5.1 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, atribuye al Director General de Servicios Sociales e Integración el impulso de la ordenación y planificación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid en colaboración, en su caso, con las Administraciones locales y con entidades privadas.

IV.- CONTENIDO.

El proyecto de decreto está compuesto por una parte expositiva y una parte dispositiva compuesta por dieciséis artículos, distribuidos en tres capítulos, además de una disposición adicional, una derogatoria y cuatro finales.

El Capítulo I regula las disposiciones generales, el objeto y su ámbito de aplicación.

El Capítulo II desarrolla la estructura territorial del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y las normas para la elaboración de su estructura básica.

El Capítulo III define y establece el contenido del Mapa de Servicios Sociales, sus funciones, fuentes de información y órganos competentes para su elaboración y actualización.

La disposición adicional establece la obligación de informar al órgano competente en materia de Atención Social Primaria, por parte de otros órganos de la consejería competente en materia de servicios sociales, acerca de la actividad convencional prevista con las entidades locales para la prestación de servicios de Atención Social especializada, con el objetivo de asegurar la adecuada coordinación y planificación de los servicios sociales en el ámbito local.

La disposición derogatoria única es de carácter general.

La disposición final primera introduce una modificación necesaria en el Decreto 51/2023, de 3 de mayo por el que se regulan la Historia Social Única, el Registro Único de Usuarios y otros instrumentos de gestión de la información del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, para adecuarlo al orden competencial establecido en el Decreto 241/2023, de 20 de septiembre. Las disposiciones segunda, tercera y cuarta se refieren, respectivamente, a la habilitación para el desarrollo normativo, el plazo para la aprobación de la orden por la que se apruebe la zonificación, y la entrada en vigor.

V.- NORMAS QUE QUEDAN DEROGADAS

Se establece la derogación de cuantas disposiciones de rango igual o inferior al presente proyecto de decreto se opongan a lo dispuesto en él.

VI.- IMPACTOS PRESUPUESTARIO Y SOCIALES.

1. Impacto económico y presupuestario.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.3.b) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, se informa en este apartado acerca del impacto presupuestario que, en un primer momento, se estimó que pudiera derivarse, de manera indirecta, del proyecto de decreto del Consejo de Gobierno previsto.

a) Análisis del impacto presupuestario.

El informe sobre el impacto presupuestario ha de emitirse por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 15/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2024. A este efecto, se proporciona la siguiente información:

Con ocasión de la primera redacción del proyecto de decreto se consideró que su aprobación podría servir para impulsar la mancomunación de municipios de

población inferior a 20.000 habitantes para la prestación de servicios sociales, tal como establece la Ley 12/2022, de 21 de diciembre y emplear para ello el incentivo de la prima financiera previsto en el artículo 90.3 de la citada ley.

De este modo, en la anterior versión de esta memoria, se hacía un análisis de la estructura de la financiación de la Red de Atención Social Primaria y se presentaba el cálculo de la cuantía máxima del coste que podría representar para la Comunidad de Madrid la prima de la financiación al conjunto de las mancomunidades de servicios sociales. Dicha cuantía ascendía a 2,7 millones de euros, si bien, como se ha dicho, representaba el incremento máximo, no obedecía a una consecuencia necesaria de la aprobación del decreto, estaba sujeta a la negociación de convenios de colaboración con las entidades locales, dependería de la disponibilidad presupuestaria y carecía de plazo de desarrollo o aplicación, ya que representaba un planteamiento hipotético.

Ese análisis no resulta ya pertinente puesto que, tras el informe emitido por la Dirección General de Presupuestos, tal como se indica más adelante, en el apartado correspondiente a dicho informe, se ha optado por atender las observaciones del mismo, se ha modificado la redacción del artículo indicado por este órgano y se ha eliminado la previsión de un eventual crecimiento del gasto.

b) Análisis del impacto económico

Respecto al impacto económico, la Ley 11/2022, 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, en su artículo 33, señala que en la tramitación de anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y disposiciones reglamentarias, la consejería competente en materia de economía evaluará el impacto económico de su aplicación en las actividades económicas afectadas, con referencia expresa a sus efectos sobre la competencia, la unidad de mercado y el impacto regulatorio en las empresas, su eficacia y su eficiencia. No obstante, no se estima impacto en las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios sociales.

2. Impacto en materia de personal.

El proyecto de decreto no implica incremento de personal ni de retribuciones, por lo que carece de impacto en esta materia, lo que hace innecesario el informe de la Dirección General de Recursos Humanos.

3. Impacto por razón de género.

El artículo 7.3.c) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, establece que deben recogerse los impactos sociales por razón de género, en la infancia y adolescencia, en la familia e igualdad y los demás tipos de impactos exigidos por normas con rango de Ley o resto de normativa básica.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su artículo 19 que los “proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género”.

En este sentido, se ha solicitado informe a la Dirección General de Igualdad, de conformidad con lo prescrito en el artículo 9.1. b) del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre.

La Dirección General de Igualdad emite informe con fecha 5 de agosto de 2024, en el que estima un impacto positivo de la aprobación de la norma.

4. Impactos en la infancia, en la adolescencia y en la familia.

El proyecto de decreto debe ser informado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad como órgano competente, de conformidad con el artículo 7.15 del Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, en virtud del artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, así como con el artículo 47 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Se solicita informe de acuerdo con el artículo 7.3.c) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad emite informe con fecha 9 de agosto de 2024, en el que no formula observaciones e informa de su estimación de ausencia de impacto de la norma proyectada en este ámbito.

5. Otros impactos: impacto sobre la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se solicitará informe al Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el artículo 3.1.c) del Decreto 276/2000, de 28 de diciembre, por el que se crea el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad. Asimismo, se solicita informe de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

El Consejo Asesor emite informe con fecha 14 de agosto de 2024, en el que reproduce las observaciones formuladas por sus integrantes.

- Al artículo 5.3.c): es coincidente con la planteada por la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y **se acepta**.
- A los artículos 5.6 y 11.2: son coincidentes con las planteadas por la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente y **se aceptan**, con las modificaciones consiguientes en el texto.
- Al artículo 9: En este caso se expone lo siguiente: «Nos parece que este apartado genera demasiada inseguridad para el usuario, al no haber un listado tasado de motivaciones, parece que queda poco objetivable.».

Se rechaza. La redacción de este artículo es análoga a la del artículo 3 de la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

- Respecto del “Área única de servicios sociales”, ASPACE realiza una reflexión de carácter general sobre la atención de las personas con pluridiscapacidad y con parálisis cerebral, que no permite su objetivación en el proyecto del decreto ni, en particular, en relación con este concepto.

Respecto al Mapa de Servicios Sociales, ASPACE recuerda la necesidad de asegurar la accesibilidad universal de todos los instrumentos. **Se acepta** y se añade el término “accesible” en la redacción de los artículos 13.b) y 15.1.

Por otra parte, la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad emite informe con fecha 8 de agosto de 2024, en el que estima un impacto positivo de la norma en tramitación.

VII. DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y CONSULTAS.

1. Consulta pública.

Se efectuó, de conformidad con los artículos 4.2.a) y 5 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y el artículo 60.1 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, en el periodo comprendido entre los días 17 de mayo y 6 de junio de 2024. Dicha consulta fue autorizada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 14 de mayo de 2024.

Durante el plazo correspondiente al trámite de consulta pública se ha recibido a través del Portal de Transparencia un escrito de consideraciones formuladas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid.

➤ **Observaciones del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid (COTS).**

El COTS recoge en su escrito un conjunto de reflexiones y consideraciones dirigidas tanto a la materia específica de la organización territorial de los servicios sociales y su representación en instrumentos orientados a la planificación y la información de servicios sociales (mapas), como también a la propia finalidad, organización y prestación de dichos servicios. Se trata de observaciones, en su mayor parte, de carácter general, de naturaleza académica o doctrinal. Dichas reflexiones, que resultan de indudable interés, han sido valoradas y tenidas en consideración en la redacción del proyecto de decreto, en particular, en lo relativo a los criterios de zonificación, la participación de la Red de Atención Social Primaria y el contenido del Mapa de Servicios Sociales.

Asimismo, se recibió a través del Registro un escrito de UGT Madrid.

➤ **Observaciones de UGT Madrid.**

UGT Madrid realiza una serie de consideraciones que pueden resumirse de la manera siguiente:

- Necesidad de realización de un estudio para determinar las necesidades, de manera que la zonificación de ajuste a lo requerido en cada territorio.

- Necesidad de coordinación con otros sistemas de protección, como el sanitario.
- Necesidad de actualización permanente.
- Exigencia de accesibilidad.
- Asegurar la difusión e información.

De la misma manera que sucede con las observaciones del COTS, las formuladas por UGT Madrid se valoran como de interés para la elaboración del proyecto de decreto y se han tenido en cuenta en su redacción, en especial, en lo relativo a la coordinación con otros sistemas, la actualización, la accesibilidad y la difusión.

De forma simultánea, se dio conocimiento a la Comisión para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 3.2 del Decreto 21/2017, de 28 de febrero, por el que se crea el Consejo para el Diálogo Social de la Comunidad de Madrid.

➤ **Informe del Grupo de Trabajo Permanente del Consejo para el Dialogo Social.**

El informe resume las posiciones de CCOO, CEIM y UGT.

CC.OO. planteará sus observaciones en la fase de información pública, sobre un texto concreto.

CEIM no formula observaciones.

De UGT se incluyen idénticas aportaciones a las remitidas de manera directa a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

2. Elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

La memoria se elabora conforme a lo establecido en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo. Se realiza en versión extendida de acuerdo con lo previsto en su artículo 7, dado que el centro directivo proponente estimó inicialmente que la propuesta normativa podría conllevar un impacto presupuestario, siguiendo la línea prevista en el artículo 90.3 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, si bien, con la redacción actual, de acuerdo con las observaciones efectuadas por la Dirección General de Presupuestos, carece del mismo.

3. Solicitud de informes preceptivos y consultas pertinentes.

Conforme a lo prescrito en el artículo 8 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, se solicitarán los siguientes informes preceptivos y facultativos necesarios para la tramitación de la norma:

- **Informe de coordinación y calidad normativa**, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, y artículos 4.2.c) y 8.4 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y 25.3.a) del Decreto 229/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

La Oficina de Calidad Normativa ha realizado numerosas observaciones referidas tanto a esta memoria como al proyecto de decreto, que han sido atendidas en su práctica totalidad.

Tan solo **se han descartado dos observaciones:**

Mediante la **observación (viii)**, referida a la parte dispositiva (apartado 3.3.3), se sugiere «valorar la introducción de la remisión del proyecto de aprobación o modificación de la zonificación territorial al Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid».

Debe señalarse que el decreto que desarrolla la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, y que debe regular el Consejo de Servicios Sociales previsto en la misma, no ha sido aprobado, por lo que no resulta oportuno incluir un trámite que no puede cumplirse, al menos de momento, y que, en todo caso, será obligatorio de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2.d) de la citada ley.

En la **observación (xxv)** se señala que «De conformidad con la regla 23 de las Directrices, se sugiere valorar la posibilidad de establecer un capítulo específico en el que se incluyan los artículos 16 y 17, ya que responden a un objeto distinto al de la regulación del Mapa de Servicios Sociales que se establece en el Capítulo III del proyecto de decreto».

Ambos artículos se refieren al Mapa de Servicios Sociales, a sus fuentes y a la información que proporciona de cara a la planificación de los servicios sociales y, por lo tanto, forman una unidad de contenido con el resto de artículos del capítulo III. En este sentido, se han añadido algunos incisos en su contenido y en el título del artículo 17, para evidenciar de forma clara su relación con el Mapa de Servicios Sociales.

Por otra parte, **en la observación (xxiii)**, referida al artículo 15.5, sugiere «revisar la utilización de la expresión «conflicto con la ley», señalando en la MAIN [a] qué tipo de centros y servicios [se] hace referencia con esta expresión».

Para dar respuesta a esta observación, se ha insertado en el texto del artículo, con el fin de precisar el significado de dicha expresión, el siguiente inciso: «en los términos definidos en el artículo 126 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid». En cuanto a los centros y servicios a los que hace referencia, se trata de los recogidos en la Cartera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (Orden 2254/2024, de 5 de agosto, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se actualizan anexos de la Orden 2372/2023, de 25 de julio, de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por la que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.), con los siguientes códigos de prestación: 030303 (SAAT), 030304 (CIASI), 030306 (I+I) y 030307 (BARNAHUS).

Nota: Debe advertirse que la toma en consideración de estas observaciones ha dado lugar a una reenumeración de los artículos, por lo que las citas de los artículos que se realizan en las respuestas a los distintos informes se refieren a texto precedente, no al resultante del trámite de informes.

- **Informes de observaciones de las secretarías generales técnicas de las consejerías**, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

No formulan observaciones las siguientes consejerías:

- Educación, Ciencia y Universidades.
- Cultura, Turismo y Deporte.

- **Formulan observaciones las siguientes consejerías:**

- **Presidencia, Justicia y Administración Local**, que lo hace a través de la Dirección General de Reequilibrio Territorial:

- En el artículo 5.3, incluir consulta al órgano competente en administración local.

Se acepta.

- Modificar el artículo 5.4 para indicar que todos los municipios estén integrados en alguna zona.

- **Se acepta.**

- En el artículo 5.5, se propone incluir la colaboración con el órgano competente en materia de Administración local.

Se acepta.

- En el artículo 5.6, se propone incluir las zonas estadísticas.

Se acepta.

- En el artículo 16.1, propone incluir la necesaria coordinación con la información de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales y el coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

Se acepta.

- **Economía, Hacienda y Empleo**. Su Secretaría General Técnica plantea la siguiente observación:

- Modificar la redacción del apartado 3 del artículo 7, para incluir la referencia a la aprobación de la propuesta de zonificación, en coherencia con el título del artículo.

Se acepta.

- **Sanidad**, a través de la Dirección General de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, realiza las siguientes observaciones:

- Modificar la redacción del artículo 5.6 para citar de manera correcta la denominación de las Zonas Básicas de Salud.

Se acepta.

- Contextualizar, en el artículo 11.2., la referencia a la salvaguarda del interés superior del menor.

Se acepta. Se incluye una referencia a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

- **Vivienda, Transportes e Infraestructuras**, a través de la Dirección General de Vivienda y rehabilitación, realiza la siguiente observación:

- Añadir una referencia a la accesibilidad universal, referida a los centros y equipamientos sociales en el artículo 5 del proyecto de decreto.

Se acepta y se incorpora al texto.

- **Medio Ambiente, Agricultura e Interior**, a través de la Dirección General de Urbanismo, realiza las siguientes observaciones:

- Incluir, en los artículos 7 y 14.2, la mención del órgano competente en materia de cartografía, entre los participantes en realización de la propuesta de zonificación.

Se acepta.

- **Digitalización.**

- Modificar el artículo 13 para añadir la gobernanza del dato y la apertura de los datos.

Se acepta.

- En el artículo 14.2, añadir a “Administración digital”, “de transformación digital, gobernanza e impulso de las telecomunicaciones”.

Se acepta.

- Se sugiere corregir determinados errores formales advertidos en el texto.

Se corrigen.

- **Informe del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad**, que, a tenor del artículo 3.1.c) del Decreto 276/2000, de 28 de diciembre, por el que se crea el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad, tiene entre sus funciones conocer los proyectos normativos de la Comunidad de Madrid que puedan afectar a este colectivo e informar aquellos proyectos que tengan como mínimo rango de Ley o Decreto.

La información relativa a este informe se ha reseñado en el apartado VI de esta memoria, que incluye los impactos de carácter social.

- **Informe de la Dirección General de Presupuestos** de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3.b) del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, en relación con artículo 5.1.k) del Decreto 230/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.

Con fecha de 2 de septiembre de 2024, la Dirección General de Presupuestos emite informe desfavorable sobre el proyecto de decreto, condicionado al

mantenimiento de «la redacción actual del artículo 6 en el proyecto y las pretensiones de incremento de gasto reflejadas en la memoria».

A este respecto, cabe señalar, en primer término, que **se ha modificado la redacción del artículo 6**, de acuerdo con la observación (vi) recogida en el Informe de Coordinación y Calidad Normativa y en el propio informe de la Dirección General de Presupuestos, aludiendo tan solo, en la nueva redacción, a la previsión contenida en el artículo 90.3 de la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, y suprimiendo el último inciso de la anterior redacción del artículo. Por lo tanto, se elimina en el texto cualquier previsión que pudiera implicar, por sí misma, un incremento del gasto.

En ningún caso habría podido darse esta circunstancia de manera automática por la aprobación del decreto. Lo que se planteaba en la versión anterior de la MAIN era un escenario hipotético en el caso de que la Comunidad de Madrid decidiera incrementar la prima en la financiación, en la línea de lo ya previsto en la ley, se determinaba la cuantía máxima de dicho incremento supuesto y se explicaba la motivación y el cálculo del mismo.

Del planteamiento realizado en la versión anterior de la memoria, podía concluirse que el incremento del gasto era una medida que se proponía como necesaria y que pudiera derivarse de la aprobación de la norma.

Si bien es cierto que, tanto en la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, como en el proyecto de decreto se expresa la preferencia de la Comunidad de Madrid por la prestación mancomunada de servicios sociales en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, y que la prima en la financiación es un incentivo para lograr esta fórmula, en la nueva redacción se evita exceder lo ya establecido en la ley. Esta modificación significa que no se prevé un gasto adicional consiguiente o asociado a la aprobación del decreto.

Con la modificación de la redacción del artículo 6 **se considera atendida la objeción planteada** por la Dirección General de Presupuestos.

Teniendo en cuenta los cambios introducidos, y habiéndose vinculado de manera expresa el carácter desfavorable del informe al mantenimiento de la redacción inicial del citado artículo 6, por la Secretaría General Técnica de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se considera oportuno, no obstante, volver a solicitar informe a la Dirección General de Presupuestos, lo que se realiza con fecha de 18 de septiembre de 2024.

No habiéndose manifestado esta Dirección General en el plazo previsto, el día 8 de octubre se reitera la solicitud del informe, sin que a este fecha se haya recibido respuesta alguna, lo que cabe interpretar como no posición a la continuación del procedimiento.

- **Informe de la Dirección General de Reequilibrio Territorial de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización para la Administración de la Comunidad de Madrid, y de acuerdo con el artículo 13.2.d) del Decreto 229/2023, de 6 de septiembre, del

Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Esta Dirección General emite informe con fecha 14 de agosto de 2024. El informe tiene carácter positivo y en él propone la inclusión del órgano competente en administración local en el proceso de toma de decisiones relativas a la materia del proyecto de decreto. En este sentido, cabe señalar que esta circunstancia ha sido tenida en cuenta en el artículo 7 del mismo.

- **Informe de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia** de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, conforme al artículo 4.g) y los criterios 12 y 14) del Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los Sistemas de Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de Madrid y al artículo 9.2 del Decreto 229/2023, de 6 de septiembre.

Esta Dirección General, con fecha 6 de agosto de 2024, emite informe en el que no formula observaciones al proyecto de decreto.

- **Informe de la Delegación de Protección de Datos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales**, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El Delegado de Protección de Datos emite informe con fecha 8 de agosto de 2024, en el que aprecia que el contenido del proyecto de decreto es conforme con la normativa vigente y en el que, no obstante, realiza varias recomendaciones relativas a la modificación de la disposición final primera del proyecto de decreto que, por su carácter especializado, **se han incorporado el texto**. La redacción que se da al artículo 14 del Decreto 51/2023, de 3 de mayo, en esta disposición final, se complementa con la modificación propuesta en el informe de coordinación y calidad normativa.

- **Informe del Consejo Regional de Mayores de la Comunidad de Madrid** entre cuyas funciones está la de conocer e informar los proyectos normativos de la Comunidad de Madrid que puedan afectar a este colectivo de conformidad con el artículo 2.1 c) del Decreto 65/1998, de 23 de abril, por el que se crea el Consejo Regional de Mayores.

Este órgano emite informe con fecha 27 de agosto de 2024, en el que no formula observaciones.

4. Trámites de audiencia e información pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, el proyecto se someterá a los trámites de audiencia e información pública, previsto en el artículo 60.2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta las competencias de las entidades locales en materia de atención social primaria, se dará audiencia a la Administración local a través de la Federación de Municipios de Madrid, así como al Ayuntamiento de Madrid por su especial relevancia y singularidad.

5. Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de conformidad con el artículo 8.5 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

6. Informe de la Abogacía General, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 a) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

7. Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo.

8. Elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación.

VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO

No se prevén impactos genéricos en el mercado y la economía. No obstante, se espera una mejora en la agilidad de los procedimientos de gestión de los servicios sociales, en la coordinación entre Administraciones y entidades colaboradoras para la prestación de servicios sociales y entre diferentes sistemas de protección para una prestación integral de servicios, así como en la información disponible para ciudadanos, profesionales y entidades públicas y privadas.

Todo ello podrá dar lugar a un impacto positivo en la eficiencia de los recursos económicos de difícil cuantificación.

IX. EVALUACIÓN EX POST.

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3.3, 3.4, 7.4.e) y 13 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, la evaluación del resultado de la aplicación de la norma, corresponderá al órgano competente en materia de calidad y evaluación de la consejería competente en servicios sociales, que deberá establecer la metodología de evaluación apropiada.

Madrid, a fecha del día de la firma,

EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Fdo.: F. Ignacio Ayres Janeiro